

No. 33640

**SPAIN
and
FRANCE**

Treaty on transfrontier cooperation between territorial communities. Signed at Bayonne on 10 March 1995

Authentic texts: Spanish and French.

Registered by Spain on 25 March 1997.

**ESPAGNE
et
FRANCE**

Traité relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales. Signé à Bayonne le 10 mars 1995

Textes authentiques : espagnol et français.

Enregistré par l'Espagne le 25 mars 1997.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES

PREAMBULO

El Reino de España y la República Francesa, en lo sucesivo, Partes Contratantes,

Conscientes del dinamismo de la cooperación entre las entidades territoriales concernidas por el presente Tratado.

Deseando mantener y desarrollar esta cooperación para enriquecer sus relaciones bilaterales y reforzar la construcción europea,

Deseando facilitar la aplicación del Convenio Marco Europeo de 21 de Mayo de 1980 sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales, cuyos principios esenciales inspiran la cooperación regulada por el presente Tratado,

Reconociendo que la diferencia de estructuras políticas y administrativas de los dos Estados y de su legislación en materia de cooperación transfronteriza requiere un marco jurídico apropiado que permita la aplicación de los principios contenidos en el Convenio Marco mencionado,

Decididos a promover esta cooperación dentro del respeto de sus Derechos internos,

han convenido lo que sigue:

ARTICULO 1

De conformidad con el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales firmado en Madrid el 21 de Mayo de 1980, el presente Tratado tiene por objeto facilitar y promover la cooperación transfronteriza entre entidades territoriales francesas y españolas en el respeto del Derecho interno y de los compromisos internacionales de cada una de las Partes Contratantes y en particular dentro del respeto de las competencias que están reconocidas en el Derecho interno a las entidades territoriales.

ARTICULO 2

En el presente Tratado el término entidades territoriales designa:

- Por parte española: las Comunidades Autónomas del País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, así como los Territorios Históricos, las Provincias, y los Municipios pertenecientes a las cuatro Comunidades Autónomas indicadas. Asimismo, y siempre que incluyan Municipios de los anteriores, comprende a las Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios instituidas por las Comunidades Autónomas expresadas y a las Areas metropolitanas y Mancomunidades de Municipios creadas con arreglo a la legislación de Régimen Local.
- Por parte francesa: las Regiones de Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, así como los Departamentos, los Municipios y sus agrupaciones comprendidos en el territorio de las citadas Regiones.

ARTICULO 3

En el marco del presente Tratado, las entidades territoriales de un lado y otro de la frontera podrán emprender acciones de cooperación transfronteriza cuando el objeto de esta cooperación pertenezca, en virtud del Derecho interno de cada una de las Partes Contratantes, al ámbito competencial de una y de otra entidad territorial y cuando exista entre ellas un interés común.

La conclusión de convenios de cooperación transfronteriza entre entidades territoriales -en adelante, "convenios"- constituirá el medio para la cooperación transfronteriza en el marco del presente Tratado.

Los convenios serán concluidos por las entidades territoriales conforme al procedimiento establecido, para cada una de ellas, por el Derecho interno de la Parte Contratante a la que pertenezcan.

Estos convenios tendrán por objeto permitir a las entidades territoriales, en los ámbitos de interés común, crear y gestionar equipamientos o servicios públicos y coordinar sus decisiones.

Los convenios podrán prever que las entidades territoriales creen organismos de cooperación o participen en organismos existentes, dotados o no de personalidad jurídica, en las condiciones previstas por el presente Tratado.

No podrán ser objeto de convenio ni las potestades normativas y de control de las entidades territoriales ni las atribuciones que éstas ejercen en tanto que agentes del Estado, en el caso de la Parte francesa, o en virtud de una competencia delegada por el Estado, en el caso de la Parte española.

ARTICULO 4

Los convenios concluidos entre entidades territoriales determinarán el Derecho aplicable a las obligaciones en ellos contenidas. El Derecho aplicable será el de una de las Partes Contratantes. En caso de litigio sobre el cumplimiento de tales obligaciones, la jurisdicción competente será la de la Parte Contratante cuyo Derecho haya sido elegido.

Los convenios comprometerán exclusivamente a las entidades territoriales firmantes. Las Partes Contratantes en ningún modo quedarán comprometidas por las consecuencias de las obligaciones contenidas en los convenios concluidos entre entidades territoriales o por la puesta en práctica de tales convenios.

ARTICULO 5

- 1.- Las entidades territoriales españolas podrán participar en las agrupaciones de interés público de cooperación transfronteriza ("groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière") o en el capital de las sociedades de economía mixta locales ("sociétés d'économie mixte locales") cuyo objeto sea explotar servicios públicos de interés común ya existentes, constituídos por entidades territoriales francesas.

Las entidades territoriales francesas podrán participar en los consorcios ya existentes constituídos por entidades territoriales españolas.

Las entidades territoriales españolas y francesas podrán crear conjuntamente, en Francia, "groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière" o "sociétés d'économie mixte locales" cuyo objeto sea explotar servicios públicos de interés común y, en España, consorcios.

- 2.- Las decisiones de las entidades territoriales españolas sobre su participación en los organismos franceses mencionados estarán sometidas al Derecho español. Las decisiones de las entidades territoriales francesas sobre su participación en los organismos españoles mencionados estarán sometidas al Derecho francés.
- 3.- El presente Tratado será aplicable a los organismos de cooperación no contemplados en el apartado 1 anterior, abiertos a entidades territoriales extranjeras, por el Derecho francés o por el Derecho español, con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado. Esta disposición surtirá efecto a partir de la notificación por la Parte Contratante concernida, por vía diplomática, de la modificación de su Derecho interno.

ARTICULO 6

Sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables a cada tipo de organismo en el Derecho interno de las Partes, los estatutos de los organismos de cooperación transfronteriza a que se refiere el artículo 5 anterior, que deberán figurar anejos al convenio, comprenderán al menos:

- 1) la denominación, la sede, la duración y el Derecho por el que se rija;
- 2) su ámbito territorial;
- 3) el objeto concreto y los cometidos atribuidos al organismo por las entidades territoriales que en él participen;
- 4) la composición de los órganos de decisión y dirección, las modalidades de representación de las entidades territoriales que en él participen, la forma de designación de sus representantes;

- 5) el régimen de relaciones del organismo con las entidades territoriales que en él participen;
- 6) las modalidades de funcionamiento, en particular en lo que respecta a la gestión de personal;
- 7) las reglas presupuestarias y contables aplicables;
- 8) la forma de financiación de actividades;
- 9) los requisitos para la modificación de las condiciones iniciales de funcionamiento, para la adhesión o retirada de miembros, así como para la disolución.

El Derecho aplicable al organismo de cooperación transfronteriza será el del Estado de la sede y el propio del tipo de organismo al que pertenece. El organismo estará obligado a atender las peticiones de información procedentes de las autoridades de control financiero de la otra Parte Contratante.

Los estatutos y las deliberaciones del organismo serán redactados en las lenguas cuya utilización sea preceptiva en el Derecho interno de cada una de las Partes Contratantes para los actos y deliberaciones celebrados por las entidades territoriales.

El organismo se financiará mediante aportaciones incluidas en el presupuesto de sus miembros, y en su caso mediante ingresos propios por la prestación de servicios, sin que pueda percibir ingresos de naturaleza tributaria.

El organismo preparará un presupuesto anual de ingresos y gastos y establecerá un balance y una cuenta de resultados, objeto de auditoría externa independiente.

ARTICULO 7

Las entidades territoriales podrán crear órganos comunes, sin personalidad jurídica, para estudiar cuestiones de interés mutuo, formular propuestas de cooperación a las entidades territoriales que los integren e impulsar la adopción por parte de éstas de las medidas necesarias para poner en práctica las soluciones previstas.

Estos órganos comunes no podrán adoptar resoluciones obligatorias para sus miembros ni para terceros.

ARTICULO 8

Cuando los convenios prevean la celebración de contratos, en particular de contratos públicos, éstos serán celebrados y ejecutados con arreglo al Derecho de la Parte Contratante aplicable a la entidad territorial o al organismo de cooperación de los previstos en el artículo 5, que asuman la responsabilidad de contratar.

En todo caso, por lo que se refiere a los procedimientos relativos a publicidad, contratación y adjudicación de empresas, las entidades territoriales deben hacer constar en el convenio las obligaciones que al respecto les impone su Derecho interno, teniendo en cuenta el objeto del contrato y su precio.

Las entidades territoriales adoptarán, sin afectar al Derecho aplicable a tales contratos públicos, aquellas medidas que sean útiles para permitir a cada una de ellas respetar las obligaciones que, en las materias anteriormente citadas, les impone el Derecho de la Parte Contratante a la que pertenecen.

ARTICULO 9

En la ejecución de los convenios, las entidades territoriales serán responsables dentro del límite de su participación financiera o, en su defecto, por los beneficios que hayan obtenido de la cooperación.

Los convenios serán concluidos por una duración no superior a diez años, excepto aquellos que tengan por objeto la creación o la gestión de un equipamiento, que podrán ser concluidos por una duración igual a la de la utilización del equipamiento, medida por su período de amortización. Estos convenios podrán ser renovados por decisión expresa de las entidades firmantes.

ARTICULO 10

Los convenios contrarios al presente Tratado serán nulos. Dicha nulidad será declarada, de acuerdo con el Derecho interno de la Parte que sea aplicable. La otra Parte será informada sin retraso de esta anulación.

ARTICULO 11

La Comisión franco-española de cooperación transfronteriza entre entidades territoriales establecida por intercambio de cartas realizado en Foix el 21 de Octubre de 1994 asume el seguimiento del presente Tratado.

Está compuesta por un máximo de seis representantes nombrados por cada uno de los respectivos Gobiernos. Su composición será comunicada por vía diplomática mediante Nota Verbal.

Cuando los asuntos del orden del día lo requieran, podrán participar en las reuniones de la Comisión

representantes de las entidades territoriales, así como expertos competentes en las materias previstas para discusión.

Ambos Estados ocuparán la Presidencia conjuntamente.

Cada uno de los dos Estados se encargará de la Secretaría.

La Comisión se reunirá cuatro veces al año en España y en Francia, de forma alternativa.

Sus misiones serán las siguientes:

- Intercambiar información entre las Partes Contratantes acerca de las iniciativas de las entidades territoriales en aplicación del Tratado.
- Estudiar los problemas que se le sometan relacionados con la aplicación del Tratado y formular propuestas para su solución.
- Hacer cualquier propuesta con vistas a mejorar el Tratado.
- Dar cuenta anualmente a las Partes de la aplicación del Tratado.
- Examinar cualquier otra cuestión que las Partes le encomienden y que se refiera al campo de aplicación del Tratado.

La Comisión prestará particular atención a las iniciativas de cooperación transfronteriza que, por el diferente reparto de competencias entre el Estado y las entidades territoriales en España y en Francia, requieran soluciones apropiadas con la intervención, en su caso, de la Administración del Estado.

Los Gobiernos se informarán mutuamente y se concertarán acerca del desarrollo de la cooperación transfronteriza entre entidades territoriales en el marco de los trabajos de la Comisión. Esta contribuirá a la solución de los problemas referentes a las entidades territoriales.

ARTICULO 12

Transitoriamente, por lo que concierne a las entidades territoriales españolas, en tanto la legislación española no haya definido el procedimiento aplicable, la eficacia de los convenios requerirá la conformidad expresa del Gobierno español.

Las entidades territoriales españolas que, previamente a la entrada en vigor del presente Tratado, hubieran concluido convenios con entidades territoriales francesas sin haber seguido el procedimiento establecido en la Declaración formulada por España al ratificar el Convenio Marco de Madrid de 21 de Mayo de 1980, dispondrán de un período de un año, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, para adaptar al mismo dichos convenios.

ARTICULO 13

Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los trámites internos exigidos por su legislación interna respectiva para la entrada en vigor del presente Tratado, que surtirá efectos el día de la recepción de la última notificación.

ARTICULO 14

El presente Tratado se firma por una duración ilimitada.

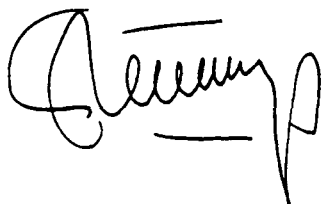
Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciarlo mediante notificación a la otra Parte por escrito y por vía diplomática. La denuncia surtirá efectos en la fecha de la recepción de la notificación por la otra Parte.

La denuncia no afecta a los convenios que hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha en que la denuncia surta efectos.

Hecho en Bayona, el 10 de Marzo de 1995

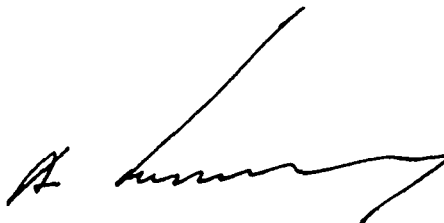
en dos ejemplares cada uno en lengua española y francesa, dando ambos textos fe.

Por el Reino
de España:



CARLOS WESTENDORP Y CABEZA
Secretario de Estado
para las Comunidades Europeas

Por la República
Francesa:



ALAIN LAMASSOURE
Ministro Delegado
para los Asuntos Europeos

TRAITÉ¹ ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTA-
LIÈRE ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Préambule

Le Royaume d'Espagne et la République Française, ci-après dénommés les Parties Contractantes

Conscients du dynamisme de la coopération entre les collectivités territoriales concernées par le présent Traité,

Désireux de maintenir et de développer cette coopération pour enrichir les relations bilatérales des Parties Contractantes et renforcer la construction européenne,

Souhaitant faciliter l'application de la Convention Cadre Européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales², dont les principes essentiels inspirent la coopération instituée par le présent Traité,

Reconnaissant que la différence des structures politiques et administratives des deux Etats et de leur législation en matière de coopération transfrontalière requiert un cadre juridique approprié pour permettre l'application des principes contenus dans la Convention Cadre susvisée,

Décidés à promouvoir cette coopération dans le respect de leur droit interne,

sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Conformément à la Convention cadre du Conseil de l'Europe relative à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales signée à Madrid le 21 mai 1980, le présent Traité a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre

¹ Entré en vigueur le 24 février 1997 par notification, conformément à l'article 13.

² Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1272, p. 61.

collectivités territoriales espagnoles et françaises dans le respect du droit interne et des engagements internationaux de chacune des Parties Contractantes et en particulier dans le respect des compétences qui sont reconnues en droit interne aux collectivités territoriales.

ARTICLE 2

Dans le présent Traité, le terme de collectivités territoriales désigne :

- pour la Partie espagnole : les Communautés Autonomes du Pays Basque, de la Navarre, de l'Aragon et de la Catalogne ainsi que les Territoires Historiques, les Provinces et les Communes appartenant aux quatre Communautés Autonomes précitées.

Il désigne également, à condition que les Communes susvisées y soient incluses, les "Comarcas" ou autres Entités groupant plusieurs communes, instituées par les Communautés Autonomes précitées, ainsi que les "Areas Metropolitanas" et les "Mancomunidades de Municipios", créés conformément à la législation sur le Régime Local.

- pour la Partie française : les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ainsi que les départements, les communes et leurs groupements compris dans le territoire desdites régions,

ARTICLE 3

Dans le cadre du présent Traité, les collectivités territoriales de part et d'autre de la frontière peuvent entreprendre des actions de coopération transfrontalière lorsque l'objet de cette coopération est, en vertu du droit interne de chacune des Parties Contractantes, du domaine de compétence de l'une et de l'autre collectivité territoriale et lorsqu'il existe entre elles un intérêt commun.

La conclusion de conventions de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales -ci-après dénommées conventions- constitue le moyen de la coopération transfrontalière dans le cadre du présent Traité.

Ces conventions sont conclues par les collectivités territoriales, conformément à la procédure établie pour chacune d'entre elles par le droit interne de la Partie Contractante dont elle relève.

Ces conventions ont pour objet de permettre aux collectivités territoriales, dans les domaines d'intérêt commun, de créer et de gérer des équipements ou des services publics et de coordonner leurs décisions.

Elles peuvent prévoir que les collectivités territoriales créent des organismes de coopération ou participent à des organismes existants, dotés ou non de la personnalité juridique, dans les conditions prévues par le présent Traité.

Ne peuvent faire l'objet de convention ni les pouvoirs de police ni ceux de réglementation ni les attributions que les collectivités territoriales ou leurs autorités exercent en tant qu'agent de l'Etat pour la Partie française ou en raison du pouvoir délégué par l'Etat pour la Partie espagnole.

ARTICLE 4

Les conventions conclues entre les collectivités territoriales définissent le droit applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit applicable est celui de l'une des Parties Contractantes. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie Contractante dont le droit a été choisi.

Les conventions n'engagent que les collectivités territoriales signataires. Les Parties Contractantes ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences des obligations contenues dans les conventions conclues entre les collectivités territoriales ou par la mise en oeuvre de ces conventions.

ARTICLE 5

- 1.- Les collectivités territoriales espagnoles peuvent participer aux groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière ou au capital des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun, déjà existants constitués par des collectivités territoriales françaises.

Les collectivités territoriales françaises peuvent participer à des groupements ["consorcios"] déjà existants constitués par des collectivités territoriales espagnoles.

Les collectivités territoriales espagnoles et françaises peuvent créer conjointement, en France, des groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière ou des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter les services publics d'intérêt commun et, en Espagne, des groupements ["consorcios"].

- 2.- Les décisions des collectivités territoriales espagnoles sur leur participation aux organismes français susvisés sont soumises au droit espagnol. Les décisions des collectivités territoriales françaises sur leur participation aux organismes espagnols susvisés sont soumises au droit français.
- 3.- Le présent Traité est applicable aux organismes de coopération non visés au paragraphe 1 ci-dessus, ouverts aux collectivités territoriales étrangères, par le droit français ou par le droit espagnol, postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité. Cette disposition prend effet dès la notification par la Partie Contractante concernée, par la voie diplomatique, de la modification de son droit interne.

ARTICLE 6

Sous réserve des dispositions juridiques applicables à chaque catégorie d'organismes dans le droit interne des Parties, le statut des organismes de coopération transfrontalière visés à l'article 5 ci-dessus, qui doit être annexé à la convention, comprend au moins :

- 1) La dénomination, le lieu du siège, la durée et le droit par lequel il est régi ;
- 2) la zone géographique concernée par cet organisme ;
- 3) l'objet précis et les missions qui sont dévolus à cet organisme par les collectivités territoriales qui y participent ;
- 4) la composition des organes de décision et de direction, les modalités de représentation des collectivités territoriales qui y participent, le mode de désignation de leurs représentants ;

- 5) le régime des relations de l'organisme avec les collectivités locales qui y participent ;
- 6) les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel ;
- 7) les règles budgétaires et comptables applicables ;
- 8) le mode de financement des activités ;
- 9) les modalités de modification des conditions initiales de fonctionnement, d'adhésion ou de retrait de membres ainsi que de dissolution.

Le droit applicable à l'organisme de coopération transfrontalière est celui de l'Etat du siège et de la catégorie d'organismes à laquelle il appartient. L'organisme doit en outre satisfaire à toutes les demandes d'information émanant des autorités chargées du contrôle financier de l'autre Partie Contractante.

Les statuts et les délibérations de l'organisme sont rédigés dans les langues dont l'utilisation est prescrite dans le droit interne de chacune des Parties Contractantes pour les actes et délibérations effectués par les collectivités territoriales.

L'organisme est financé soit par des participations budgétaires de ses membres, soit par des recettes perçues au titre des services qu'il rend à l'exclusion de tout prélèvement de nature fiscale. Il tient un budget annuel prévisionnel et établit un bilan et un compte de résultat certifié par des experts indépendants des personnes qui le constituent.

ARTICLE 7

Les collectivités territoriales peuvent créer des organes communs, sans personnalité juridique, pour étudier des questions d'intérêt mutuel, formuler des propositions de coopération aux collectivités territoriales qui les composent et encourager l'adoption par celles-ci des mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les solutions envisagées.

Ces organes communs ne peuvent adopter de résolutions contraignantes ni pour leurs membres ni pour les tiers.

ARTICLE 8

Lorsque des conventions prévoient la passation de contrats publics, en particulier des marchés publics, ceux-ci sont passés et exécutés dans le droit de la Partie Contractante applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé à l'article 5 qui en assument la responsabilité.

Toutefois, en ce qui concerne les procédures relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises, les collectivités territoriales mentionnent dans la convention les obligations qui leur sont imposées par leur droit interne, compte tenu de la nature de l'opération et de son coût.

Elles prennent, sans porter atteinte au droit qui s'applique à ces contrats ou marchés publics, des mesures utiles pour permettre à chacune d'entre elles de respecter ses obligations dans les matières prévues ci-dessus dans le droit de la Partie Contractante dont elles relèvent.

ARTICLE 9

Lors de l'exécution des conventions, les collectivités territoriales sont responsables dans la limite de leur participation financière ou, à défaut, du bénéfice qu'elles ont tiré de cette coopération.

Les conventions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder dix années, à l'exception de celles de ces conventions qui ont pour objet la création ou la gestion d'un équipement, qui peuvent être conclues pour une durée égale à celle de l'utilisation de cet équipement, mesurée par la durée de son amortissement. Ces conventions sont renouvelables par décision expresse de leurs signataires.

ARTICLE 10

Les conventions contraires au présent Traité sont nulles. Ladite nullité est déclarée, conformément au droit interne de la Partie Contractante dont le droit est applicable. L'autre Partie Contractante est informée sans délai de cette annulation.

ARTICLE 11

La commission franco-espagnole de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, mise en place par échange de lettres fait à Foix le 21 octobre 1994, est chargée du suivi du présent Traité.

Elle est composée de part et d'autre au maximum de six représentants désignés par chacun des Gouvernements. Sa composition est communiquée par la voie diplomatique sous forme de note verbale. Quand les sujets de l'ordre du jour le requièrent, des représentants des collectivités territoriales peuvent, ainsi que des experts compétents sur les matières prévues, participer aux réunions de la Commission.

La Présidence est assurée conjointement par les deux Etats. Le secrétariat est assuré par chacun des deux Etats.

La Commission se réunit quatre fois par an alternativement en Espagne et en France.

Ses missions sont les suivantes :

- échanger des informations entre les Parties Contractantes sur les initiatives des collectivités territoriales en application de ce Traité ;
- étudier les problèmes ayant trait à l'application de ce Traité qui lui seront soumis et formuler des propositions pour les résoudre ;
- faire toute proposition visant à améliorer ce Traité ;
- rendre compte annuellement aux Parties de l'application du Traité ;
- examiner toute autre question que les Parties lui confieraient entrant dans le champ d'application de ce Traité.

La Commission prête une attention particulière aux initiatives de coopération transfrontalière qui, en raison de la répartition différente des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en France et en Espagne, nécessitent des solutions appropriées avec le concours, le cas échéant, des services de l'Etat.

Les Gouvernements s'informent mutuellement et se concertent sur le développement de la coopération transfrontalière des collectivités territoriales dans le cadre des travaux de la Commission. Celle-ci contribue à la solution des problèmes concernant les collectivités territoriales.

ARTICLE 12

A titre transitoire, en ce qui concerne les collectivités territoriales espagnoles, tant que la législation espagnole n'a pas défini la procédure pour donner un caractère exécutoire aux conventions, l'approbation expresse et préalable du Gouvernement espagnol est requise.

Les collectivités territoriales espagnoles qui, préalablement à l'entrée en vigueur du présent Traité, auraient passé des conventions avec des collectivités territoriales françaises sans avoir suivi la procédure établie dans la Déclaration faite par l'Espagne lors de la ratification¹ de la Convention de Madrid du 21 mai 1980, disposeront d'une période d'une année à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité pour adapter lesdites conventions au Traité.

ARTICLE 13

Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Traité qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.

ARTICLE 14

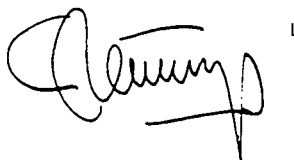
Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties Contractantes peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet à la date de la réception de la notification par l'autre Partie.

La dénonciation est sans effet sur les conventions entrées en vigueur à la date d'effet de cette dénonciation.

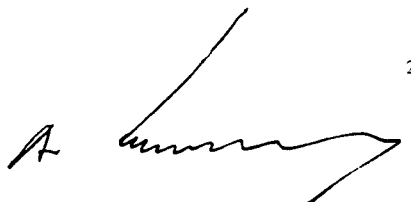
¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1605, p. 437.

Fait à ...Bayonne....., le ...10...mars..1995, en deux exemplaires chacun en langues espagnole et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume
d'Espagne :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlos Westendorp y Cabeza', with a small superscript '1' to its right.

Pour la République
Française :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alain Lamassoure', with a small superscript '2' to its right.

¹ Carlos Westendorp y Cabeza.

² Alain Lamassoure.

[TRANSLATION — TRADUCTION]

TREATY¹ BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE FRENCH
REPUBLIC ON TRANSFRONTIER COOPERATION BETWEEN
TERRITORIAL COMMUNITIES

PREAMBLE

The Kingdom of Spain and the French Republic, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

Aware of the benefits of cooperation between the territorial communities to which this Treaty relates,

Desiring to maintain and develop this cooperation in order to enhance the bilateral relations of the Contracting Parties and strengthen European integration,

Wishing to facilitate the implementation of the European Outline Convention on transfrontier cooperation between territorial communities or authorities of 21 May 1980,² on the fundamental principles of which cooperation under this Treaty is based,

Recognizing that the differences between the political and administrative structures of the two States and between their respective legislation on transfrontier cooperation require an appropriate legal framework to permit the implementation of the principles set forth in the said Outline Convention,

Determined to promote this cooperation while respecting their domestic legislation,

Have agreed as follows:

Article 1

In accordance with the Outline Convention of the Council of Europe on transfrontier cooperation between territorial communities or authorities, signed in Madrid on 21 May 1980, the purpose of this Treaty is to facilitate and promote transfrontier cooperation between French and Spanish territorial communities, with due regard to the domestic legislation and international commitments of each of the Contracting Parties and, in particular, with due regard to the jurisdiction of the territorial communities recognized in the domestic legislation of the Parties.

Article 2

In this Treaty the term territorial communities means:

— In the case of Spain: the autonomous communities of the Basque Country, Navarre, Aragon and Catalonia, and the historical territories, provinces and municipalities belonging to those four autonomous communities.

It also means, whenever the aforementioned municipalities are included, the “*comarcas*” or other entities that group together several municipalities, created by

¹ Came into force on 24 February 1997 by notification, in accordance with article 13.

² United Nations, *Treaty Series*, vol. 1272, p. 61.

the said Autonomous Communities, and the metropolitan areas and associations (“*mancomunidades*”) of municipalities created by local government legislation.

— In the case of France: the regions of Aquitaine, Midi-Pyrénées and Languedoc-Roussillon, and the *départements* and the municipalities and groupings of municipalities included in the territory of the said regions.

Article 3

Under the terms of this Treaty, the territorial communities on either side of the frontier may undertake transfrontier cooperation activities when the purpose of such cooperation is within the jurisdiction of both territorial communities, as defined by the respective domestic legislation of the Contracting Parties, and when there is mutual interest.

The conclusion of transfrontier cooperation agreements between territorial communities — hereinafter referred to as “agreements” — shall be the means of transfrontier cooperation in the context of this Treaty.

Such agreements shall be concluded by the territorial communities in accordance with the procedure established for each community by the domestic legislation of the Contracting Party to which the community belongs.

The purpose of these agreements shall be to allow the territorial communities to create and manage public services or equipment in areas of mutual interest and to coordinate their decisions.

The agreements may provide that the territorial communities may create cooperation bodies or participate in existing bodies, with or without legal status, under the conditions established in this Treaty.

Neither regulatory nor police authorities nor the prerogatives that the territorial communities or their authorities exercise as agents of the State, in the case of the French Party, or through powers delegated by the State, in the case of the Spanish Party, may be the subject of an agreement.

Article 4

The agreements concluded between territorial communities shall determine the law applicable to the obligations contained therein. The applicable law shall be that of one of the Contracting Parties. In the event of a dispute regarding the fulfilment of such obligations, the competent jurisdiction shall be that of the Contracting Party whose law has been selected.

The agreements shall be binding only on the territorial communities which sign them. The Contracting Parties shall in no way be bound by the consequences of the obligations contained in the agreements concluded between territorial communities or by the implementation of such agreements.

Article 5

1. The Spanish territorial communities may participate in transfrontier cooperation public interest groups (*groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière*) or hold shares in the capital of local mixed economy companies (*sociétés d'économie mixte locales*) established by French territorial communities, the purpose of which is to operate existing public services of mutual interest.

The French territorial communities may participate in existing consortia (*consorcios*) established by Spanish territorial communities.

The Spanish and French territorial communities may together establish, in France, transfrontier cooperation public interest groups (*groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière*) or local mixed economy companies (*sociétés d'économie mixte locales*), the purpose of which is to operate public services of mutual interest, and, in Spain, consortia (*consorcios*).

2. The decisions of the Spanish territorial communities regarding their participation in the aforementioned French bodies shall be subject to Spanish law. The decisions of the French territorial communities regarding their participation in the aforementioned Spanish bodies shall be subject to French law.

3. This Treaty shall be applicable to cooperation bodies that are not covered by subparagraph 1 above, which are open to foreign territorial communities, under French law or under Spanish law, following the entry into force of the Treaty. This provision shall enter into force as soon as the Contracting Party concerned has given notice, through the diplomatic channel, that its domestic legislation has been modified.

Article 6

Subject to the legal provisions applicable to each type of body under the domestic law of the Parties, the by-laws of each transfrontier cooperation body referred to in article 5 above, which shall be annexed to the agreement, shall include at least:

1. The name, the location of the head office, the duration and the law by which it will be governed;
2. The geographical area covered by the body;
3. The specific purpose and terms of reference assigned to the body by the territorial communities participating in it;
4. The composition of the decision-making and management organs, the modalities for the representation of the territorial communities participating in them, and the manner in which their representatives are appointed;
5. The rules governing the relations of the body with the territorial communities participating in it;
6. The operating procedures, particularly with regard to personnel management;
7. The applicable budgetary and accounting rules;
8. The method of financing activities;
9. The requirements for the modification of the initial conditions for the body's operation, for the accession or withdrawal of its members and for its dissolution.

The law applicable to transfrontier cooperation bodies shall be that of the State where the head office is located which governs the type of body to which it belongs. The body shall be obliged to respond to requests for information from the financial control authorities of the other Contracting Party.

The by-laws and records of the meetings of the body shall be drawn up in the languages the use of which is prescribed in the domestic law of each of the Contracting Parties for records and meetings of the territorial communities.

The body shall be financed either by budgetary contributions from its members or by revenue collected in respect of services rendered, excluding all deductions for tax purposes. The body shall prepare an annual budget of income and expenses and shall draw up a balance sheet and a statement of accounts, to be certified by an independent external auditor.

Article 7

The territorial communities may create joint organs, without legal status, to examine issues of mutual interest, formulate cooperation proposals to the territorial communities which form part of them, and encourage the territorial communities to adopt the measures necessary to implement the solutions proposed.

These joint organs shall not adopt resolutions that are binding either on their members or on third parties.

Article 8

When the agreements provide for the signing of contracts, in particular public contracts, such contracts shall be signed and implemented in accordance with the law of the Contracting Party applicable to the territorial community or to the cooperation body referred to in article 5 which assumes responsibility for it.

However, with regard to the procedures relating to publicity and the tendering and awarding of contracts, the territorial communities shall mention in the agreements the obligations imposed on them by their domestic legislation, taking into account the nature of the operation and its cost.

Without detriment to the law applicable to such public contracts, the territorial communities shall take such measures as may be useful to allow each of them to fulfil their obligations with regard to the matters mentioned above under the law of the Contracting Party to which they belong.

Article 9

In the implementation of the agreements, the responsibility of the territorial communities shall be limited by their financial participation or, failing any such participation, by the profits that they have derived from the cooperation.

Agreements shall be concluded for a period of no more than ten years, except in the case of conventions the purpose of which is the production or management of equipment, which may be concluded for a period equal to that of the use of the equipment, measured by its amortization period. These agreements shall be renewable by the express decision of the signatory communities.

Article 10

Agreements contrary to this Treaty shall be null and void. The said nullity shall be declared in accordance with the domestic law of the Party whose law is applicable. The other Party shall be informed immediately of the annulment.

Article 11

The Franco-Spanish Commission on Transfrontier Cooperation between territorial communities, established by an exchange of letters carried out at Foix on 21 October 1994, shall be responsible for monitoring this Treaty.

It shall be composed of a maximum of six representatives on each side, appointed by their respective Governments. Its membership shall be communicated through the diplomatic channel in the form of notes verbales.

When the topics on the agenda so require, representatives of the territorial communities and experts on the matters to be discussed may participate in the Commission's meetings.

The Commission shall be presided over jointly by the two States.

The Secretariat shall be provided by each of the two States.

The Commission shall meet four times a year, alternately in Spain and France.

It shall have the following functions:

- To exchange information between the Contracting Parties on actions taken by the territorial communities pursuant to the Treaty.
- To study problems connected with the implementation of the Treaty which are submitted to it and to formulate proposals for their solution.
- To make proposals for the improvement of the Treaty.
- To report annually to the Parties on the implementation of the Treaty.
- To consider any other question submitted to it by the Parties which falls within the scope of the Treaty.

The Commission shall pay special attention to transfrontier cooperation activities which, owing to the different distribution of jurisdiction between the State and the territorial communities in Spain and in France, require appropriate solutions with the intervention, if necessary, of the State administration.

The Governments shall provide information to each other and shall collaborate in the development of transfrontier cooperation between territorial communities within the framework of the Commission's work. The Commission shall contribute to the solution of any problems regarding the territorial communities.

Article 12

As a temporary measure, as far as the Spanish territorial communities are concerned, until Spanish legislation has defined the procedure for making the agreements enforceable, the express consent of the Spanish Government shall be required.

The Spanish territorial communities which, prior to the entry into force of this Treaty, may have signed agreements with French territorial communities without having followed the procedure established in the Declaration made by Spain when it ratified¹ the Madrid Outline Convention of 21 May 1980, shall have a period of one year from the date of the entry into force of this Treaty to adapt such agreements to the Treaty.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1605, p. 437.

Article 13

Each of the Contracting Parties shall notify the other when it has completed the internal formalities required by its domestic legislation for the entry into force of this Treaty, which shall take effect on the date of receipt of the last such notification.

Article 14

This Treaty is concluded for an indefinite period.

Each of the Contracting Parties may denounce it by notifying the other Party in writing through the diplomatic channel. The denunciation shall take effect on the date of receipt of such notification by the other Party.

The denunciation shall not affect agreements which entered into force prior to the date on which the denunciation takes effect.

DONE in Bayonne, on 10 March 1995, in two original copies, each in the Spanish and French languages, both texts being equally authentic.

For the Kingdom
of Spain:

CARLOS WESTENDORP Y CABEZA
Secretary of State
for the European Communities

For the French
Republic:

ALAIN LAMASSOURE
Minister Delegate
for European Affairs
